



RECLAMACION EN REVISION.
 NUMERO: 353/69.
 MIGUEL GONZALEZ RUL.
 MTRO. RAFAEL ROJINA VILLEGAS.
 SRIQ. SABINO VENTURA SILVA.

México, Distrito Federal, ACUERDO DE LA --
 TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
 NACION, correspondiente al día dos de septiembre --
 de mil novecientos setenta.

Vo. Bo.

MINISTRO:

VISTOS los recursos de reclamación inter-
 puestos por Miguel González Rul, contra los acuerdos
 de catorce de mayo y quince de julio de mil nove-
 cientos sesenta y nueve, dictados por el Presidente
 de este Alto Tribunal en el Toca a la revisión --
 353/69, relativo al amparo directo número 946/67, --
 promovido por el propio González Rul contra actos --
 del Juez decimoprimer menor de la ciudad de México
 y,

RESULTANDO:

UNICO.- El Presidente de esta Suprema Corte
 de Justicia dictó los acuerdos que textualmente di-
 cen: "México, Distrito Federal, a catorce de mayo --
 "de 1969 mil novecientos sesenta y nueve. Con el ofi-
 "cio número 20-13 del Segundo Tribunal Colegiado del
 "Primer Circuito, en Materia Civil, recibido con --
 "el anexo que se acompaña y escrito del quejoso de
 "abril siete de mil novecientos sesenta y nueve fór-
 "mase y registrese el toca relativo al amparo promo-
 "vido por Miguel González Rul contra actos del Juez --
 "Onceavo Menor de esta Capital, Acúsese recibo. Des-
 "glósese el escrito de agravios que obra a fojas 57
 "a 77 de los autos anexos, dejando la razón corres- --
 "pondiente y agréguese a este toca. Visto el recurso.

"de revisión que se hace valer en contra de la sen--
"tencia dictada por el citado Tribunal Colegiado so--
"bre violación de procedimiento, y teniendo en consi--
"deración que para la procedencia de este recurso, -
"conforme lo dispone el artículo 83, fracción V, - -
"de la Ley de Amparo, la resolución combatida debe -
"decidir sobre la constitucionalidad de una Ley, o -
"establecer la interpretación directa de un precepto
"constitucional, siempre que esa decisión o interpre--
"tación no esté fundada en la jurisprudencia estable--
"cida por esta Corte; que el caso a estudio se con--
"trae al segundo supuesto, o sea a establecer la in--
"terpretación directa de un precepto constitucional;
"que el quejoso aduce que el Tribunal Colegiado hizo
"una nueva interpretación del artículo 14 constitu--
"cional, en el último párrafo de la hoja nueve y en
"la diez de la sentencia recurrida, afirmando que la
"falta de perfeccionamiento y desahogo de la prueba
"documental pública consistente en los informes de -
"la Dirección de Obras Públicas del Departamento del
"Distrito Federal y en un oficio de la propia autori--
"dad, no causa ningún perjuicio al quejoso, PORQUE --
"NO tiene relación con litis y porque éste no rea--
"lizó ninguna petición para propugnar por la rendi--
"ción de los informes ante el Juzgado Menor de esta -
"Capital, a pesar de que el impulso procesal era a -
"su cargo ni consta en autos que haya hecho gestión
"alguna ante la autoridad administrativa que debía -
"rendirlos; y que la nueva interpretación del artícu--
"lo 14 constitucional, según el recurrente, consiste
"en sostener que cuando las pruebas ofrecidas no ten-



RECL. 353/69.

"gan relación con la litis planteada no deben cum--
"plirse las formalidades esenciales del procedimien--
"to; en tales condiciones debe estimarse, como lo ha--
"ce notar el Tribunal Colegiado, que la sentencia --
"recurrida no contiene interpretación directa del ar--
"tículo 14 de la Carta Fundamental, pues sin mencio--
"nar siquiera este precepto sólo considera que la --
"falta de desahogo de una prueba documental pública--
"ajena a la litis, por falta de gestión del oferente,
"no causa perjuicio a éste; y si no hay interpreta--
"ción directa de dicho artículo constitucional, sino
"que este se pretende deducir de las consideraciones
"relativas a la aplicación de las normas procesales
"relativas a las pruebas resulta improcedente el re--
"curso conforme a lo previsto por el artículo 107 --
"constitucional, fracción IX; y aún en el supuesto --
"de que hubiera siquiera interpretación indirecta --
"del artículo 14 constitucional, por expresarse al --
"final de la sentencia recurrida que, por las razo--
"nes expuestas, no se vulneran las garantías que el --
"mismo establece el caso se encuadra dentro de la --
"excepción prevista en el párrafo segundo de la frac--
"ción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, ya que --
"en los conceptos de violación primero y segundo ex--
"presados en la demanda de garantías el quejoso y --
"ahora recurrente afirma que se violaron respecto --
"de las pruebas citadas los artículos 278, 283, 288,
"289, 294, 295, 327, 328, 333, 411 y 437 del Código --
"de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, re--
"lativos a la prueba de documentos Públicos y a su --

"recepción en juicio; y el citado párrafo segundo a la
"letra dice: "No obstante lo dispuesto en esta frac--
"ción (La V del 83) la revisión no procede en los --
"casos de aplicación de normas procesales de cualquier
"categoría o de violación a disposiciones legales se--
"cundarias". Por lo tanto y con fundamento, además --
"en los artículos 89 y 90, párrafo primero y último de
"la Ley de Amparo se acuerda: I.- Se desecha por im--
"procedente el recurso de revisión interpuesto por --
"el quejoso Miguel González Rul. II.- Se impone el --
"citado quejoso una multa de quinientos pesos. III. --
"Notifíquese".

"México, Distrito Federal, a 15 quince de ju--
"lio de 1969 mil novecientos sesenta y nueve, Agrégue--
"se a sus autos el escrito de Miguel González Rul. Vis--
"to el contenido del escrito de cuenta y teniendo en
"consideración que se interpone recurso de reclamación
"contra el auto de catorce de mayo próximo pasado, --
"que desechó el recurso de revisión que hizo valer --
"en contra de la sentenciada dictada por el Segundo --
"Tribunal Colegiado del Primer Circuito, alegando que
"interpretó el artículo 14 constitucional, con funda--
"mento en los artículos 83, fracción V y 26 fracciones
"II y V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la --
"Federación remítase el presente expediente a la Ter--
"cera Sala de esta Suprema Corte para los efectos --
"legales consiguientes".

El primer acuerdo se notificó al quejoso --
personalmente el once de junio de mil novecientos --
sesenta y nueve; y mediante escrito recibido por la --

RECL. 353/69.



Oficina de Certificación Judicial y correspondencia de esta Suprema Corte el trece de junio del año próximo pasado, lo recurrió en reclamación. El segundo acuerdo fue recurrido en reclamación por el propio Miguel González Pul, mediante escrito de diecinueve de julio del año próximo pasado, recibido en esa misma fecha por la Oficina mencionada.

El Presidente de este Alto Tribunal por -- acuerdo de quince de julio del año próximo pasado -- ordenó la remisión de este negocio a esta Tercera -- Sala para resolver los recursos de reclamación inter- puestos; y por acuerdo de doce de septiembre del -- año próximo pasado el Presidente de esta Tercera -- Sala ordenó pasar el expediente al Ministro semanero para que resuelva lo procedente,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Tercera Sala es competente -- para conocer de los recursos de reclamación de con- formidad con los artículos 13 fracción VII, 21 y 26 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial -- de la Federación, por recurrirse acuerdos dictados -- en un asunto civil por el Presidente de la Sala.

SEGUNDO.- El recurrente, hace valer los si- guientes agravios en relación al acuerdo de catorce de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

I.- No está conforme con el acuerdo impug- nado, que desecha el recurso de revisión que inter- puso contra la sentencia dictada por el Segundo Tri- bunal Colegiado del Circuito en Materia Civil, fun- dándose dicho acuerdo en que la sentencia recurrida

en revisión no contiene una interpretación directa del artículo 14 constitucional. En el caso, el artículo antes citado establece y consagra las garantías individuales, a saber: la seguridad jurídica - de los actos realizados al amparo de una ley vigente, que no pueden ser violados como consecuencia de una nueva ley; la garantía del individuo que a la vez es un freno, de que nadie debe hacerse justicia por sí mismo, sin recurrir a las autoridades; la obligación de las autoridades de cuidar y cumplir - las garantías que el propio precepto establece o sea: La existencia del juicio que corresponda; el cumplimiento total de las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y que la sentencia debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y en su defecto, en los principios generales del derecho; que este precepto está garantizando la justicia, que no se hará lo que la autoridad quiera, sino que los encargados de impartirla deberán cuidarse y guardar las normas que previamente establecen las leyes; que en el caso, procede establecer si la sentencia que recurrió en revisión contiene o no una interpretación del artículo 14 constitucional; y para ello precisa examinar su escrito de agravios en relación a la revisión, pues su simple lectura - demostrará la forma en que se ha violado el artículo mencionado; que en esas condiciones, resulta - - inexacto lo que sostiene el acuerdo recurrido, pues no se limitó a señalar como interpretaciones del pre-



RECL. 353/69.

cepto constitucional las que indica dicho acuerdo-- sino que señaló otras varias; que como se veía de -- sus agravios, el fallo del Tribunal Colegiado con-- tiene interpretación directa del artículo constitu-- cional citado.

II.- El acuerdo impugnado que desechó el -- recurso de revisión, es indebido porque no tuvo -- en cuenta el escrito de expresión de agravios en el -- que se encuentran consideraciones relativas a la -- interpretación del artículo 14 constitucional; que -- por ello, carecía de base el acuerdo recurrido, por-- que condiciona su resolución a una duda, al decir -- que la falta de desahogo de una prueba documental -- pública ajena al debate, por falta de gestión del -- oferente no causaba perjuicios; y que no había inter-- pretación directa del artículo 14 constitucional, -- sino que esta se pretendía deducir de las considera-- ciones relativas a las pruebas; que ahora bien, el -- acuerdo mencionado se colocó en el supuesto de duda: -- "Si no hay interpretación directa de dicho artícu-- "lo constitucional", basándose para ello no en la -- sentencia impugnada ni en el escrito de agravios -- -- de su promoción de siete de abril de mil nove-- cientos sesenta y nueve, siendo así inexactas las -- consideraciones de que la interpretación directa -- -- trataba de deducirlas de las consideraciones rela-- tivas a la aplicación de las normas procesales to-- cantes a las pruebas; que precisamente, por eso -- -- insistía en que se examinara la sentencia del Tribu-- nal Colegiado y su escrito de agravios; que además --

353/69.

no es cierto que el artículo 107 constitucional, --
fracción IX, establezca la improcedencia del recur-
so de revisión, pues dicha fracción estatuye que --
procede el recurso de revisión contra las sentencias
de los Tribunales Colegiados cuando en ellas se con-
tenga interpretación de un artículo de la Constitu-
ción, y que no se encuentre fundada en la jurisperu-
dencia de este Alto Tribunal; que en la especie, el
Tribunal Colegiado de Circuito no se apoyó en la --
jurisprudencia la que violó abiertamente. A conti-
nuación, el recurrente transcribió diversas tesis -
jurisprudenciales de esta Suprema Corte en relación
a las pruebas; que en el caso, las tesis jurisperu-
denciales 282 y 283 las invocó el Magistrado del --
Tribunal de Circuito licenciado Gamboa en su voto -
particular disidente de la mayoría de los otros. -
dos Magistrados y ello confirma la interpretación -
del artículo 14 constitucional por parte del Tribu-
nal citado; que además, esas jurisprudencias no se -
están refiriendo ni se invocaron para comprobar --
la violación a las leyes del procedimiento, sino --
para atacar las cuestiones de fondo que se tratan --
en la sentencia a revisión o sea que confirman que -
dicha sentencia contiene la interpretación del precep-
to constitucional tanto en cuanto a violaciones del
procedimiento, como en cuanto al fondo al apreciar
en forma indebida el valor de las pruebas y así --
incorrectamente el precepto constitucional, pues --
la sentencia no es conforme a la letra ni a la in-
terpretación nueva del Tribunal Colegiado de Circui-
to.



RECL. 353/69.

to.

III.- En el acuerdo recurrido se invocan disposiciones contenidas en el código procesal, y estima que se trata de aplicación de normas procesales o de violación a disposiciones legales secundarias, lo cual es un error pues en el Código de Procedimientos Civiles se contienen reglas solamente para el procedimiento del juicio, sino también en cuanto a la forma, término, modos jurídicos de los que debe contener la sentencia definitiva, y así mismo disposiciones para la interpretación de las pruebas; que así determina las reglas a que deben sujetarse los jueces para la recepción de las pruebas y en su caso para la interpretación de las mismas, como casos de excepción faculta al juzgador a interpretarlas conforme a su criterio lo cual desde luego ya no consiste en una mera norma de desahogo procesal o disposición legal secundaria, sino que constituye una verdadera norma jurídica nacida del artículo 14 constitucional; que en este aspecto dicho precepto garantiza en el juicio que se cumplan en él las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, que es necesario distinguir entre lo que pueden ser normas procesales de cualquier categoría o disposiciones legales secundarias, como aquellas que garantiza el artículo 14 constitucional y que denomina como formalidades esenciales del procedimiento; que la parte esencial de un juicio sea civil o criminal, es aquello que --

RECL. 353/69.

está establecido y consagrado como garantías individual por el artículo 14 aludido al hablar de formalidades esenciales del procedimiento o sea el derecho de audiencia, el derecho de las parte de que se les oiga, de que se les permita demostrar la razón, la verdad que les asiste para evitar que se les - - prive de sus posesiones y de sus derechos; que esa parte esencial del juicio no es otra que la recepción y desahogo de las pruebas, y en cambio, al aceptar - el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito - la resolución del a quo, no es otra cosa que violar las garantías individuales consagradas en el artículo 14 constitucional; que en estas condiciones, - al querer justificar la falta de recepción de pruebas, el tribunal citado hizo una interpretación directa del precepto constitucional mencionado.

IV.- En el acuerdo se invoca la fracción V, del artículo 83 de la Ley de Amparo, el que por ser anticonstitucional no podía servir de apoyo a la - resolución combatida; que en efecto, la anticonstitucionalidad del párrafo segundo de la fracción V - del artículo 83 citado se deriva del hecho de estar en pugna con las disposiciones y las garantías individuales que establece el artículo 14 constitucional, por lo cual, no es posible admitir que una - simple Ley Reglamentaria como es la Ley de Amparo - pueda dejar sin efecto la disposición expresa del - 14 de la Constitución en cuanto al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento; que



RECL. 353/69.

además, ni siquiera encuentra apoyo el segundo -- párrafo de la fracción V del artículo 83 mencionado, en la fracción IX del 107 constitucional, ya -- que ésta lo que estatuye es precisamente que las -- resoluciones en materia de amparo directo que -- pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito -- no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. El segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107 constitucional, añade que la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recurrible, cuando se funde en la Jurisprudencia que haya establecido este -- Alto Tribunal sobre la constitucionalidad de una -- ley o la interpretación directa de un precepto de -- la constitución; que como podía verse, no existe -- disposición alguna en la Constitución que sirva de -- apoyo al segundo párrafo de la fracción V del artículo 83 mencionado, en tanto que para hacer valer la revisión de que se trata invocó otras disposiciones de la fracción IX del 107 constitucional, que establece la procedencia de este recurso cuando se trata de interpretación directa del artículo 14, o -- de cualquiera otro de la Constitución; que así -- pues, también planteaba a este Alto Tribunal la -- cuestión relativa a la anticonstitucionalidad de --

RECL. 353/69.

la fracción V, segundo párrafo del artículo 83 de la Ley de Amparo.

Miguel González Rul, hizo valer el siguiente agravio en relación al acuerdo de fecha quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve:

En escrito de trece de junio de mil novecientos sesenta y nueve, hizo valer la inconstitucionalidad de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, por las razones contenidas en esa promoción; aduciendo que en aquella expresó que debía turnarse al Pleno de esta Suprema Corte el recurso de reclamación hecho valer con objeto de que se decidiera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad aludida; que sin embargo, el auto impugnado no solamente se abstuvo de hacer la remisión del expediente, sino que ni siquiera hizo la menor referencia a ese punto. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Federación, establece que corresponde a la Suprema Corte conocer en Pleno de las reclamaciones que se formulen contra los acuerdos del Presidente de la Suprema Corte; que además, el mismo precepto estatuye en las fracciones IV bis, V, y XIV, que es el mencionado Pleno a quien corresponde decidir si una ley es o no inconstitucional, pues las Salas carecen de esa competencia, y la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los acuerdos del Presidente pueden ser reclamados ante el Pleno que deba conocer del asunto,



siempre que la reclamación se presente dentro del término de tres días, situaciones que se dan en el caso, de allí la procedencia del recurso de que se trata.

TERCERO.- El recurrente alega en sus agravios fundamentalmente lo siguiente:

a). El envío del expediente al Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, para que decida la inconstitucionalidad aducida en el primer recurso de reclamación, y,

b). La revocación del acuerdo del Presidente de esta Suprema Corte de Justicia que desechó por improcedente el recurso de revisión que hizo valer contra el fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

El recurrente aduce en el cuarto concepto de violación que el párrafo segundo de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo es inconstitucional y que ese motivo debe conocer de este aspecto el Pleno de este Alto Tribunal, y después en su caso procederse a resolver la reclamación interpuesta. Ahora bien, no es verdad que de la inconstitucionalidad alegada deba conocer el Pleno, dado que, si como el propio agraviado sostiene, la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito establece una interpretación directa de un precepto constitucional, es evidente, que no conoce de esos fallos el Pleno mencionado, sino esta Sala, según lo establece el artículo 26, fracción II de la Ley Orgánica del Po-

der Judicial de la Federación, que expresa; "corresponde conocer a la Tercera Sala;...del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo en materia civil pronuncien los tribunales colegiados de Circuito, cuando establezcan la interpretación siempre que no se funden en la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia". En estas condiciones, si la inconstitucionalidad se hace valer en un asunto del cual toca conocer a esta Tercera Sala, es concluyente que también a esta le corresponde resolver sobre la inconstitucionalidad aducida, y no al Pleno de esta Suprema Corte, como quiere el agraviado.

Pasando a estudiar la inconstitucionalidad alegada en el cuarto concepto de violación en relación al párrafo segundo de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, cabe decir que su estudio carece de importancia, porque el Presidente de este Alto Tribunal para desochar el recurso de revisión, invocó en apoyo de su resolución otros preceptos de la Ley fundamental y de la Ley de Amparo, que fundamentan ampliamente las consideraciones jurídicas que sustentan el acuerdo impugnado, siendo por ello inoperante el argumento que se contesta.

SIGUE EN LA PAGINA 15.



En cuanto a la segunda cuestión alegada por el recurrente, relativa a que el fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, al confirmar la sentencia del a quo hizo una interpretación directa del artículo 14 constitucional, cabe decir, que no tiene razón el agraviado, porque en el caso, el Tribunal Colegiado de Circuito no hizo ninguna interpretación directa del artículo 14 constitucional, en su fallo, puesto que si se examina éste, - no aparece que haga un estudio directo de esa norma sino que al hacer el examen de los conceptos de -- violación relativos a que no se recibieron las pruebas documentales que ofreció, que el a quo había admitido, afirmó que la falta de perfeccionamiento de las pruebas documentales relativas a los informes que se solicitaron a la Dirección de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, no causaba perjuicio al agraviado por no tener relación con el debate. En efecto, el Tribunal Colegiado expresó: "...La inoperancia de las infracciones "apuntadas surge de la circunstancia de que la falta de perfeccionamiento de las documentales ofrecidas como prueba por el demandado, relativas a -- "informes que debía rendir la Dirección de Obras Públicas, así como la falta de perfeccionamiento en -- "el desahogo de la prueba consistente en el oficio "25053 de diez de agosto de mil novecientos sesenta "y siete, se refieren a cuestiones que no tienen -- "ninguna relación con la litis planteada, la cual -- "se reduce exclusivamente a determinar si la causa "rescisoria señalada como fundamento de la acción -

RECL. 353/69.

"ejercitada, en relación al contrato de arrendamiento, se encuentra debidamente comprobada en los autos del juicio sumario; por lo que evidentemente la falta de perfeccionamiento y desahogo de esas pruebas no causa ningún perjuicio al quejoso". De la transcripción del párrafo precedente claramente se ve que no se está haciendo una interpretación directa del artículo 14 constitucional, ni fijando su sentido, ni su alcance jurídico, sino que esta argumentando sobre la ineficacia de las pruebas documentales ofrecidas por el recurrente, que es cuestión completamente distinta a establecer el alcance jurídico de un precepto constitucional.

Tampoco se está estableciendo una interpretación directa del artículo 14 constitucional al afirmar el Tribunal Colegiado que los informes que debían rendir la Dirección de Obras Públicas, del Departamento del Distrito Federal, pudo el recurrente lograr que se rindieran de haberlos gestionado, dado que el a quo solicitó con toda oportunidad dichos informes en relación a las pruebas que no se recibieron y que ofreció el agraviado. En seguida se transcribe la consideración respectiva aducida por el Tribunal Colegiado: -- "Independientemente de lo anterior, debe tenerse en cuenta, por lo que se refiere a los informes -- que debía rendir la Dirección de Obras Públicas, que el impulso procesal para obtener la rendición oportuna de esos informes correspondía a la parte oferente de la prueba, y con mayor razón si tuvo --



- 17 -

RECL. 353/69.

"tiempo necesario para realizar las gestiones ten-
"dientes a esa finalidad ante el hecho reconocido
"de que se giraron con la oportunidad debida los -
"oficios pertinentes solicitando esos informes; --
"debiendo advertirse también que la parte interesa-
"da en que se recibieran esas pruebas documentales
"no realizó ninguna petición para proponer por la
"rendición de los informes ante el Juzgado Décimo
"Primero Menor de esta Capital, ni consta en autos
"que haya hecho gestión alguna ante las autorida--
"des administrativas que debían rendirlos. Lo ex--
"puesto lleva a la conclusión, como se ha dicho, que
"los motivos de inconformidad de carácter procesal
"antes examinados, carecen de fundamento y apoyo -
"legales". Como se ve de esta consideración, el -
Tribunal Colegiado ni siquiera se refiere concre-
tamente al artículo 14 constitucional, por lo - -
cual resulta carente de toda veracidad la afirma-
ción del recurrente de que el fallo del citado --
Tribunal hizo una interpretación directa de la --
norma constitucional citada, pues se repite, para
que haya interpretación directa de un precepto de
la Constitución, es indispensable que el Tribunal
sentenciador fije por sí mismo el sentido de una
disposición constitucional, determinando su al- -
cance jurídico, pero no la hay cuando se deje - -
de aplicar o se viole una norma de la Constitución
que quizá pudiera existir en el caso, que es cues-
tión muy distinta a establecer la interpretación -
directa de un precepto constitucional, que requie-
ro que el Juzgador lo examine directamente y deter-

RECL. 353/69.

mine su alcance jurídico en la forma antes expuesta.

Finalmente, cabe agregar que aun cuando el recurrente en sus agravios hace diversas consideraciones que en el presente estudio no se -- contestan, ello se debe a que habiéndose estimado que no existe interpretación directa del artículo 14 constitucional, resulta ocioso examinar los demás cuestiones que también se aducen, porque en forma alguna modifican el criterio expuesto.

Así pues, no existiendo en el presente -- caso interpretación directa del artículo 14 constitucional, deben confirmarse los acuerdos impugnados.

Por lo expuesto, y con apoyo además, en -- los artículos 103, 185 a 188 de la Ley de Amparo se resuelve:

UNICO.- Son infundados los recursos de -- reclamación hechos valer por Miguel González -- Rul contra los acuerdos de catorce de mayo y -- quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve, dictados por el Presidente de este Alto Tribunal en el toca a la revisión 353/69, relativo -- al amparo número 946/67, promovido por el propio recurrente contra actos del Juez Décimoprimer -- Menor de esta ciudad de México.

Notifíquese; publíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente.



- 19 -

RECL. 353/69

61

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el Ministro Rafael Rojina Villegas.

Firman los CC. Presidente y Ministros que integran la Sala con el Secretario de Acuerdos -- que autoriza y da fe.

EL PRESIDENTE:

LIC. MARIANO AZUELA.

LOS MINISTROS:

Mariano Ramírez Vázquez
LIC. MARIANO RAMÍREZ VÁZQUEZ.

Rafael Rojina Villegas
LIC. RAFAEL ROJINA VILLEGAS.

Enrique Martínez Ulloa
LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ ULLOA.

Ernesto Solís López
LIC. ERNESTO SOLÍS LÓPEZ.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS:

Salvador Gallegos del Río
LIC. SALVADOR GALLEGOS DEL RÍO.

13 NOV. 1970

por lista de la misma fecha, se notificó la resolución anterior a los interesados y al Ministerio Público Federal.

